

No. 34758

**Spain
and
Colombia**

**Treaty on the transfer of sentenced persons between the Kingdom of Spain and the
Repnblic of Colombia. Madrid, 28 April 1993**

**Entry into force: 10 April 1998 by the exchange of instruments of ratification, in
accordance with article 11**

Authentic text: Spanish

Registration with the Secretariat of the United Nations: Spain, 30 June 1998

**Espagne
et
Colombie**

**Traité relatif au transfert des personnes condamnées entre le Royaume d'Espagne et
la République de Colombie. Madrid, 28 avril 1993**

**Entrée en vigueur : 10 avril 1998 par échange des instruments de ratification,
conformément à l'article 11**

Texte authentique : espagnol

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Espagne, 30 juin 1998

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**TRATADO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS
ENTRE
EL REINO DE ESPAÑA
Y
LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

El Reino de España y la República de Colombia.

Deseosos de establecer mecanismos que permitan fortalecer la cooperación judicial internacional;

Considerando que la reinserción es una de las finalidades de la ejecución de condenas;

Reconociendo que la asistencia entre las Partes para la ejecución de sentencias penales condenatorias es aspecto importante dentro de la política bilateral de cooperación;

Animados por el objetivo común de garantizar la protección de los derechos humanos de los condenados asegurando siempre el respeto de su dignidad;

En consecuencia, guiados por los principios de amistad y cooperación que prevalecen en sus relaciones , han convenido en celebrar el presente Tratado, por el cual se regulan los traslados de las personas condenadas en uno de los dos Estados Partes, cuando fueren nacionales españoles o colombianos.

Artículo primero

Definiciones

Para efectos del presente Tratado se entiende que:

1. "Estado Trasladante", es aquel que ha impuesto la sentencia condenatoria y del cual la persona sentenciada habrá de ser trasladada.
2. "Estado Receptor", es aquel que continuará la ejecución de la sentencia y al cual debe ser trasladada la persona sentenciada.
3. "Persona Sentenciada", es la persona que ha sido condenada por Tribunal o Juzgado del Estado Trasladante mediante sentencia definitiva y que se encuentra en prisión, pudiendo estar bajo el régimen de condena condicional, libertad preparatoria o cualquier otra forma de libertad sujeta a vigilancia.

Artículo segundo

Ambito de aplicación

1. Las penas impuestas en uno de los Estados, a nacionales del otro, podrán ejecutarse en establecimientos penitenciarios de este último, de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.

2. La calidad de nacional será demostrada en el momento de la solicitud del traslado.

3. Los Estados Parte del presente Tratado, se obligan a prestarse mutuamente la más amplia colaboración posible en materia de traslados de personas condenadas.

Artículo tercero

Jurisdicción

1. Las Partes designan como Autoridades centrales encargadas de ejercer las funciones previstas en este Tratado, a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia por parte del Reino de España, y al Ministerio de Justicia por parte de la República de Colombia.

2. La persona sentenciada continuará cumpliendo en el Estado Receptor, la pena o medida de seguridad impuesta en el Estado Trasladante y de acuerdo con las leyes y procedimientos del Estado Receptor, sin necesidad de exequáтур.

3. El Estado Trasladante o el Estado Receptor con consentimiento del trasladante, podrán conceder la amnistía, el indulto, la commutación de la pena o medida de seguridad o adoptar cualquier decisión o medida legal que entrañe una reducción o

cancelación total de la pena o medida de seguridad. Las peticiones del Estado Receptor serán fundadas y examinadas benévolamente por el Estado Trasladante.

Sólo el Estado Trasladante podrá conocer del recurso o acción de revisión.

Articulo cuarto

Condiciones de aplicabilidad

El presente Tratado se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones:

1. Que la persona sentenciada sea nacional del Estado Receptor.
2. Que la persona sentenciada solicite su traslado o en caso de que dicha solicitud provenga del Estado Trasladante o del Estado Receptor, la persona sentenciada manifieste su consentimiento expresamente y por escrito.
3. Que el delito materia de la condena no sea político.
4. Que la decisión de repatriar se adopte caso por caso.

5. Que los Estados Trasladante y Receptor se comprometan a comunicar a la persona sentenciada las consecuencias legales de su traslado.
6. Que la sentencia condenatoria sea firme y no existan otros procesos pendientes en el Estado Trasladante.
7. Que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena constituyan un delito de acuerdo con las normas del Estado Receptor.

Articulo quinto
Obligación de facilitar informaciones

1. Cualquier condenado a quien pueda aplicarse el presente Tratado deberá estar informado por el Estado de condena del tenor del presente Convenio, así como de las consecuencias jurídicas que se derivan del traslado.
2. Si el condenado hubiere expresado al Estado Trasladante su deseo de ser trasladado en virtud del presente Tratado, dicho Estado deberá informar de ello al Estado Receptor con la mayor diligencia posible después de que la sentencia sea firme.

3. Las informaciones comprenderán:

- a) El nombre, la fecha y el lugar de nacimiento del condenado;
- b) En su caso, la dirección en el Estado receptor;
- c) Una exposición de los hechos que hayan originado la condena;
- d) La naturaleza, la duración y la fecha de comienzo de la condena.

4. Si el condenado hubiere expresado al Estado Receptor su deseo de ser trasladado en virtud del presente Tratado, el Estado Trasladante comunicará a dicho Estado, a petición suya, las informaciones a que se refiere el párrafo 3 que antecede.

5. Deberá informarse por escrito al condenado de cualquier gestión emprendida por el Estado Receptor o el Estado Trasladante en aplicación de los párrafos precedentes, así como de cualquier decisión tomada por uno de los dos Estados con respecto a una petición de traslado.

Articulo sexto

Peticiones y respuestas

- 1. Las peticiones de traslado y las respuestas se formularán por escrito.**

- 2. Dichas demandas se dirigirán por el Ministerio de Justicia del Estado requirente al Ministerio de Justicia del Estado requerido. Las respuestas se comunicarán por las mismas vias.**

- 3. El Estado requerido informará al Estado requirente, con la mayor diligencia posible, de su decisión de aceptar o denegar el traslado solicitado.**

Articulo séptimo

Documentación justificativa

- 1. El Estado Receptor, a petición del Estado Trasladante, facilitará a este último:**
 - a) Un documento o una declaración que indique que el condenado es nacional de dicho Estado;**

 - b) Una copia de las disposiciones legales del Estado Receptor de las cuales resulte que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena en el**

Estado Trasladante constituyen una infracción penal con arreglo al derecho del Estado Receptor o la constituirían si se cometiera en su territorio;

2. Si se solicitare un traslado, el Estado Trasladante deberá facilitar al Estado Receptor los documentos que a continuación se expresan, a menos que uno u otro de los dos Estados haya indicado ya que no está de acuerdo con el traslado:

- a) Una copia certificada conforme de la sentencia y de las disposiciones legales aplicadas;
- b) La indicación de la duración de la condena ya cumplida, incluida la información referente a cualquier detención preventiva, remisión de pena u otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena;
- c) Una declaración en la que conste el consentimiento para el traslado; y
- d) Cuando proceda, cualquier informe médico o social acerca del condenado, cualquier información sobre su tratamiento en el Estado Trasladante y cualquier recomendación para la continuación de su tratamiento en el Estado Receptor.

3. El Estado Trasladante y el Estado Receptor podrán, uno y otro, solicitar que se le facilite cualquiera de los documentos o declaraciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 que anteceden antes de solicitar un traslado o tomar la decisión de aceptar o denegar el traslado.

Artículo octavo

Cargas económicas

La entrega del reo por las autoridades del Estado Trasladante a las del Estado Receptor se efectuará en el lugar en que convengan las Partes. El Estado Receptor se hará cargo de los gastos del traslado desde el momento en que la persona sentenciada quede bajo su custodia.

Artículo noveno

Interpretación

Ninguna de las disposiciones contenidas en este Tratado, puede ser interpretada en el sentido de que se atribuya a la persona sentenciada un derecho al traslado.

Artículo décimo

Bases para la decisión

1. Las decisiones de cada Estado, aceptando o denegando un traslado en aplicación de este Tratado serán soberanas.

2. Al tomar sus decisiones, cada Estado tendrá en cuenta, entre otros criterios, la gravedad de los delitos, sus características y especialmente si se han cometido con ayuda de una organización delictiva, las posibilidades de reinserción, la edad y salud del condenado, su situación familiar, su disposición a colaborar con la Justicia y la satisfacción de las responsabilidades pecuniarias respecto a las víctimas.

3. La notificación al otro Estado de las resoluciones denegatorias, no necesitará exponer la causa.

Artículo undécimo

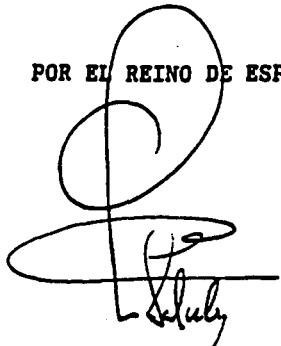
Vigencia y terminación

1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación y entrará en vigor a los 60 días del Canje de los Instrumentos de ratificación.

2. Cualquiera de los Estados Partes, podrá denunciar este Tratado, mediante notificación escrita al otro Estado. La denuncia entrará en vigor seis meses después de la fecha de notificación. Las solicitudes que hayan sido presentadas a la fecha de denuncia del presente Tratado seguirán su trámite normal sin que se vean afectadas por dicha denuncia.

Firmado en Madrid, a los veintiocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y tres, en dos ejemplares en idioma español, siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.

POR EL REINO DE ESPAÑA

A handwritten signature consisting of two large, stylized loops at the top, followed by a more fluid, cursive section below.

Tomás de la Quadra-Salcedo

Ministro de Justicia

POR LA REPUBLICA DE COLOMBIA

A handwritten signature consisting of several thick, sweeping strokes.

Ernesto Samper Pizano

Embajador de Colombia

[TRANSLATION — TRADUCTION]

TREATY ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE REPUBLIC OF COLOMBIA

The Kingdom of Spain and the Republic of Colombia,

Desiring to establish arrangements to strengthen international judicial cooperation,

Considering that rehabilitation is one of the aims of the enforcement of sentences,

Recognizing that assistance between the Parties for the enforcement of judgements in penal proceedings is an important aspect of bilateral cooperation policy,

Motivated by the common objective of guaranteeing the protection of the human rights of sentenced persons by ensuring that their dignity is always respected,

Guided by the principles of friendship and cooperation that govern their relations, have therefore agreed to conclude this Treaty to regulate the transfer of persons sentenced in either of the States Parties, if they are Spanish or Colombian nationals.

Article 1. Definitions

For the purposes of this Treaty:

1. The "Transferring State" is the one which imposed the sentence and from which the sentenced person is to be transferred.
2. The "Receiving State" is the one which will continue to enforce the sentence and to which the sentenced person is to be transferred.
3. The "Sentenced Person" is the person who has been sentenced by a tribunal or court of the transferring State in a final judgement and who is in prison, although he or she may be under a regime of suspended sentence, release on bail or any other form of supervised freedom.

Article 2. Sphere of application

1. The penalties imposed in one of the States on nationals of the other may be enforced in penal institutions of the latter State, in accordance with the provisions of this Treaty.
2. Nationality shall be proved when the request for transfer is made.
3. The States party to this Treaty undertake to provide each other with the broadest possible collaboration as regards transfers of sentenced persons.

Article 3. Jurisdiction

1. The Parties shall designate the Technical General Secretariat of the Ministry of Justice for the Kingdom of Spain and the Ministry of Justice for the Republic of Colombia to be the central authorities responsible for performing the functions established in this Treaty.

2. Sentenced persons shall continue serving in the receiving State the penalty or security measure imposed in the transferring State, in accordance with the laws and procedures of the receiving State, without need for an *exequatur*.

3. The transferring State, or the receiving State with the consent of the transferring State, may grant amnesty, pardon or commutation of the penalty or security measure, or adopt any legal measure or decision entailing reduction or total cancellation of the penalty or security measure.

The requests of the receiving State shall be well founded and examined favourably by the transferring State.

Only the transferring State may hear the action or application for judicial review.

Article 4. Applicability

This Treaty shall apply only on condition that:

1. The sentenced person is a national of the receiving State.
2. The sentenced person requests the transfer or, if the request originates from the transferring State or from the receiving State, the sentenced person has expressly given his or her written consent.
3. The crime that motivated the sentence was not political.
4. The repatriation decision is adopted on a case-by-case basis.
5. The transferring and receiving States undertake to inform the sentenced person of the legal consequences of his or her transfer.
6. The judgement is final and there are no other actions pending in the transferring State.
7. The acts or omissions which resulted in the sentence constitute a crime under the legislation of the receiving State.

Article 5. Obligation to provide information

1. All sentenced persons to whom this Treaty may apply shall be informed by the sentencing State of the terms of this agreement and of the legal consequences of a transfer.

2. If the sentenced person has expressed to the transferring State his or her desire to be transferred under this Treaty, that State shall so inform the receiving State as soon as possible after the sentence becomes final:

3. The information shall include:
 - (a) The sentenced person's name and date and place of birth;
 - (b) If appropriate, the address in the receiving State;
 - (c) A description of the acts that led to the sentence;
 - (d) The nature, duration and starting date of the sentence.

4. If the sentenced person has expressed to the receiving State his or her desire to be transferred under this Treaty, the transferring State shall transmit the information referred to in paragraph 3 above to that State upon request.

5. The sentenced person shall be informed in writing of any step taken by the receiving State or the transferring State pursuant to the preceding paragraphs and of any decision taken by either State concerning a request for transfer.

Article 6. Requests and replies

1. Requests for transfers and replies to such requests shall be made in writing.

2. Such requests shall be addressed by the Ministry of Justice of the requesting State to the Ministry of Justice of the requested State. Replies shall be communicated by the same channels.

3. The requested State shall inform the requesting State, as soon as possible, of its decision to accept or refuse the requested transfer.

Article 7. Supporting documentation

1. At the request of the transferring State, the receiving State shall provide the former State with:

(a) A document or statement indicating that the sentenced person is a national of that State;

(b) A copy of the legal provisions of the receiving State on the basis of which the acts or omissions that led to the conviction in the transferring State are criminal offences under the law of the receiving State or would be if committed in its territory.

2. If a transfer is requested, the transferring State shall provide the documents listed below to the receiving State, unless either of the two States has already indicated that it does not agree to the transfer:

(a) A certified true copy of the judgement and the legal provisions applied;

(b) Information on the length of the sentence already served, including information on any pretrial detention, remission of sentence or any other circumstance relating to enforcement of the sentence;

(c) A declaration attesting to the consent to the transfer; and

(d) When applicable, any medical or social report on the sentenced person, any information about his or her treatment in the transferring State and any recommendation for the continuation of the treatment in the receiving State.

3. Both the transferring State and the receiving State may ask to be provided with any of the documents or statements referred to in paragraphs 1 and 2 above, prior to requesting a transfer or taking the decision to accept or refuse the transfer.

Article 8. Costs

The offender shall be delivered by the authorities of the transferring State to those of the receiving State at a place agreed upon by the Parties. The receiving State shall be responsible for the transfer costs upon assuming custody of the sentenced person.

Article 9. Interpretation

None of the provisions of this Treaty may be interpreted as conferring on the sentenced person a right to be transferred.

Article 10. Criteria for the decision

1. The decisions of each State to accept or refuse a transfer pursuant to this Treaty shall be sovereign.
2. In making decisions, each State shall consider, among other factors, the seriousness of the crimes, their characteristics and, in particular, whether they were committed with the help of a criminal organization, the possibilities of rehabilitation, the age and health of the sentenced person, his or her family situation, willingness to collaborate with the law and the fulfilment of financial liabilities towards the victims.
3. Notification to the other State of decisions to refuse a transfer shall not require an explanation of the reasons.

Article 11. Validity and termination

1. This Treaty shall be subject to ratification and shall enter into force 60 days after the instruments of ratification are exchanged.
2. Either of the States Parties may terminate this Treaty, by giving written notice to the other State. The termination shall take effect six months after the date on which notice is given.

Requests that have been presented at the date on which this Treaty is terminated shall follow the normal procedure and shall not be affected by the termination.

Done at Madrid on 28 April 1993, in two copies in the Spanish language, both being equally authentic.

For the Kingdom of Spain:
TOMAS DE LA QUADRA-SALCEDO
Minister of Justice

For the Republic of Colombia:
ERNESTO SAMPER PIZANO
Ambassador of Colombia

[TRANSLATION — TRADUCTION]

TRAITÉ ENTRE LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE DE COLUMBIE RELATIF AU TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

Le Royaume d'Espagne et la République de Colombie,

Désireux de mettre en place des mécanismes qui permettent de renforcer la coopération judiciaire internationale,

Considérant que la réinsertion est l'une des finalités de l'exécution des condamnations,

Reconnaissant que l'assistance entre les Parties pour l'exécution des sentences pénales est un aspect important de la politique bilatérale de coopération,

Animés du même désir de garantir la protection des droits fondamentaux des personnes condamnées en assurant toujours le respect de leur dignité,

Guidés en conséquence par les principes d'amitié et de coopération qui régissent leurs relations,

Ont convenu de signer le présent Traité qui réglemente le transfèrement des personnes condamnées dans l'un des deux États parties lorsqu'il s'agit de ressortissants espagnols ou colombiens.

Article premier. Définitions

Aux fins du présent Traité :

1. L'expression "État de transfèrement" désigne celui qui a imposé la condamnation et à partir duquel la personne condamnée devra être transférée.

2. L'expression "État d'accueil" désigne la Partie qui continuera l'exécution de la sentence et à laquelle doit être transférée la personne condamnée.

3. L'expression "personne condamnée" désigne la personne qui a été condamnée par un tribunal ou un juge de l'État de transfèrement en vertu d'un jugement définitif et qui se trouve soit en prison, en surveillance sans détention ou en liberté provisoire, soit sous une forme ou une autre de liberté surveillée.

Article 2. Champ d'application

1. Les peines imposées dans l'un des États parties aux ressortissants de l'autre État peuvent être purgées dans des établissements pénitentiaires de ce dernier, conformément aux dispositions du présent Traité.

2. La qualité de ressortissant est prouvée au moment de la demande de transfèrement.

3. Les États parties au présent Traité sont tenus de s'accorder mutuellement la coopération la plus importante possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.

Article 3. Jurisdiction

1. Les Parties désignent comme autorités centrales chargées d'exercer les fonctions prévues dans le présent Traité respectivement le Secrétariat général technique du Ministère de la Justice pour le Royaume d'Espagne et le Ministère de la Justice pour la République de Colombie.
2. La personne condamnée continue de purger dans l'État d'accueil la peine ou la mesure de sécurité imposée dans l'État de transfèrement, conformément aux lois et procédures de l'État d'accueil, sans nécessité d'exequatur.
3. L'État de transfèrement ou l'État d'accueil avec le consentement du premier État peuvent accorder l'amnistie, la remise de peine, la commutation de la peine ou mesure de sécurité ou prendre toute décision ou mesure juridique qui entraîne une réduction ou une annulation complète de la peine ou mesure de sécurité. Les pétitions de l'État d'accueil sont fondées et examinées avec bienveillance par l'État de transfèrement.
4. Seul l'État de transfèrement peut connaître du recours ou de l'action en révision.

Article 4. Conditions d'applicabilité

L'application du présent Traité est subordonnée aux conditions suivantes :

1. La personne condamnée doit être un ressortissant de l'État d'accueil.
2. La personne condamnée doit demander son transfèrement ou, si la demande émane de l'État de transfèrement ou de l'État d'accueil, la personne condamnée doit donner son consentement exprès par écrit.
3. Le délit entraînant la condamnation ne doit pas être politique.
4. La décision de rapatriement est prise cas par cas.
5. Les États de transfèrement et d'accueil doivent s'engager à informer la personne condamnée des conséquences juridiques découlant de son transfèrement.
6. Le jugement doit être définitif et tous les recours doivent avoir été épuisés dans l'État de transfèrement.
7. Les actes ou omissions qui ont abouti à la condamnation doivent constituer un délit conformément aux normes de l'État d'accueil.

Article 5. Obligation de fournir des informations

1. L'État de condamnation doit informer toute personne condamnée à laquelle s'applique le présent Traité de la teneur du présent Traité ainsi que des conséquences juridiques qui découlent de son transfèrement.
2. Si la personne condamnée a fait connaître à l'État de transfèrement son souhait d'être transférée en vertu du présent Traité, ledit État doit en informer l'État d'accueil dans les plus brefs délais après que le jugement est définitif.
3. Les informations doivent comprendre :
 - a) Le nom, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée;

- b) Le cas échéant, son adresse dans l'État d'accueil;
- c) La relation des faits ayant donné lieu à la condamnation;
- d) La nature, la durée et la date de commencement de la condamnation.

4. Si la personne condamnée a fait connaître à l'État d'accueil son souhait d'être transférée en vertu du présent Traité, l'État de transfèrement communiquera audit État, sur sa demande, les informations auxquelles se réfère le paragraphe 3.

5. La personne condamnée doit être informée par écrit de toute démarche effectuée par l'État d'accueil ou l'État de transfèrement en application des paragraphes précédents et de toute décision prise par l'un des deux États parties concernant une demande de transfèrement.

Article 6. Demandes de transfèrement et réponses

- 1. Les demandes de transfèrement et les réponses sont formulées par écrit.
- 2. Lesdites demandes sont adressées par le Ministère de la Justice de l'État requérant au Ministère de la Justice de l'État requis. Les réponses sont communiquées par les mêmes voies.
- 3. L'État requis informe l'État requérant dans les plus brefs délais de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.

Article 7. Pièces justificatives

- 1. À la demande de l'État de transfèrement, l'État d'accueil communique à ce dernier :
 - a) Un document ou une déclaration attestant que la personne condamnée est un ressortissant dudit État;
 - b) Une copie des dispositions juridiques de l'État d'accueil en vertu desquelles les actes ou omissions ayant donné lieu à la condamnation dans l'État de transfèrement constituent un délit conformément aux droits de l'État d'accueil ou sont punissables sur son territoire.
- 2. Si un transfèrement est demandé, l'État de transfèrement doit communiquer à l'État d'accueil les documents mentionnés ci-après, à moins que l'un ou l'autre des deux États parties refuse le transfert :
 - a) Une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions juridiques appliquées;
 - b) L'indication de la durée de la peine déjà purgée, y compris des informations sur toute détention préventive; remise de peine ou autres circonstances relatives à l'accomplissement de la peine;
 - c) Une déclaration consignant le consentement de la personne condamnée concernant son transfèrement; et
 - d) Le cas échéant, tout rapport médical ou social concernant la personne condamnée, toute information sur son traitement dans l'État de transfèrement et toute recommandation pour la poursuite de son traitement dans l'État d'accueil.